

HISTORIA Y MODELOS DE DESARROLLO

David Ibarra
12 de abril de 2006

Hasta fines de la década de los setenta, México siguió una estrategia de desarrollo cuya viabilidad dependía de la satisfacción de dos condiciones centrales. En lo interno, la sustitución de importaciones, esto es el aprovechamiento de demandas preexistentes, servía de puntal al crecimiento de la producción nacional, mientras el proteccionismo aseguraba la rentabilidad de las nuevas inversiones. La condición externa descansaba en un orden internacional formado por países bastante soberanos en lo económico, de fronteras semi-cerradas, que permitía a los gobiernos responsabilizarse del desarrollo y del orden interno, sin cuidar demasiado de las repercusiones de sus políticas en otros países.

La estabilidad de ese patrón de desarrollo resultaba función del equilibrio social interno. Pero en México el reparto de los frutos del crecimiento nunca resultó especialmente equitativo. Por consiguiente, la salida a los problemas de insatisfacción social, se encontró en un intenso proceso de crecimiento económico que hizo de la capilaridad social la vía de ascenso en el ingreso o en el "status" de las clases medias, la vía de combatir la marginación de amplios grupos excluidos de la vida moderna, o la de resguardar la legitimidad política del ya envejecido movimiento revolucionario.

A la postre, el sostenimiento del modelo de sustitución de importaciones exigía la ampliación continua del mercado interno, es decir, implantar políticas redistributivas más allá del aporte del crecimiento, así como soltar algunas de las

amarras del presidencialismo autoritario, como hizo evidente la eclosión política de 1968.

Desde el punto de vista económico, el proteccionismo provocaba desequilibrios en las cuentas con el mundo al crear desincentivos a la exportación, a la modernización tecnológica, mientras obligaba a la fabricación de bienes cuyas economías de escala exigía de tamaños de mercado superiores a los nacionales. Desajustes crónicos en las cuentas externas, tensiones inflacionarias y distorsiones de precios, fueras manifestaciones claras de un proteccionismo excesivo, al que no se adosó una política de fomento exportador, como la adoptada exitosamente por varios países asiáticos.

En paralelo y con fuerza irresistible, junto a los problemas aludidos, tienen lugar mudanzas mayúsculas en el orden económico internacional. Desde la posguerra, el auge del comercio internacional y el crecimiento espectacular de las empresas transnacionales, hacen necesario romper, traspasar, las fronteras y, con ello, acotar la soberanía económica de los países. El viejo colonialismo es reemplazado con ventaja por el acceso a los mercados unificados a lo largo y ancho del planeta.

Se instauran en consecuencia, nuevas reglas para todos que inclinan a los países a liberalizar los regímenes del comercio y la inversión extranjera, desregular, retirar al Estado de la producción, elevar la lucha anti-inflacionaria a objetivo central de los países y aceptar a la democracia liberal como forma de organización política. Desde luego, los paradigmas son vehículos de afirmación de los intereses de las potencias dominantes que atienden también a la necesidad insoslayable de ordenar a la economía mundial --y hasta el orden político-- en

función de un conjunto de reglas que hagan posible la convivencia pacífica entre las naciones.

Como todo paradigma que pretende alcances universales, encapsula las preferencias del Primer Mundo respaldadas por instituciones fieles a la lógica económico-política a instaurar a escala planetaria. De ahí el cambio que se producen en las orientaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio cuando de los viejos objetivos desarrollistas, se vuelcan a promover las llamadas reformas neoliberales y a premiar a los países que las emprenden con rapidez y ortodoxia, sea con accesos al financiamiento, a los mercados de las zonas industrializadas o con respaldos políticos.

En consonancia con los nuevos cánones paradigmáticos, los objetivos económicos fundamentales se decantan en una inflación a la baja cercana a la mundial y en cuentas fiscales con déficits próximos a cero. En ambos terrenos México cumple. De un déficit fiscal del 16%-17% del producto en 1982 y 1987, en 2005 se llega otro de apenas 0.2%. De la misma manera, una inflación del 159.2% en el último de los años mencionados se redujo al 3.4%, cifra comparable a la de Estados Unidos.

Se trata de logros importantes, pero incompletos. El modelo y la reforma neoliberal ponen demasiada acento en el mercado y en el sector empresarial, suponiendo que las únicas fallas estructurales son las que genera el sector público, que las señales del propio mercado no contienen asimetrías de información, que las reacciones de los agentes productivos son instantáneas ante los incentivos creados por las propias reformas. Por eso, los equilibrios macroeconómicos se reducen a combatir la inflación y controlar las cuentas

fiscales, todo lo demás, crecimiento, empleo, equidad distributiva se producirían automáticamente por añadidura.

El logro de esos equilibrios por importante que parezca, no es suficiente para reactivar la producción, atender demandas sociales legítimas y aún resolver el estrangulamiento externo por una vía distinta a la reducción de los ritmos de desarrollo. Veamos esos temas centrales.

Entre 1950 y 1980, el producto subió a una tasa media del 6.4% mientras en el período neoliberal 1980-2005, lo hizo al 2.4%. En el primer lapso el crecimiento nunca fue negativo, con la única excepción de 1953. En abierto contraste en el segundo tramo de tiempo, el producto fue mucho más volátil, retrocediendo en cinco años. La situación se torna dramática si se toma la evolución del ingreso per cápita. En el período 1950-1980, la tasa media de expansión fue del 3.3% y las fluctuaciones económicas llevaron a resultados negativos en dos años (1953 y 1959), mientras durante el período neoliberal hay estancamiento crónico (ascenso promedio del 0.45%) y se producen ocho retrocesos anuales (1983, de 1986 a 1988, 1994, 1995, 2001 y 2002).

Lo anterior indica que el proceso de formación de capital se debilitó de modo importante. En efecto, entre 1950 y 1980, la inversión bruta en capital fijo ascendió a una tasa del 8.6% en promedio anual, fortaleciendo la estructura productiva y de infraestructura del país, así como multiplicando los empleos en el sector moderno de la economía. En los siguientes diez años, la inversión se estanca. El descenso vertical del gasto público en formación de capital (-6% anual) no alcanza a ser compensado con el esfuerzo privado (+3.7%). Tal situación persiste con posterioridad a 1990, tipificando, un largo período de empobrecimiento en la inversión con retrocesos marcadísimos en la pública y

ascenso fluctuante de la inversión empresarial. Con todo, la formación de capital se recupera en alguna medida a partir de 1990 al elevarse a un ritmo del 4% anual (4.6% la privada y -4.5% la pública), menos de la mitad del registrado entre 1950 y 1980.

No bastó la afluencia casi masiva de la inversión extranjera directa (168.1 miles de millones de dólares) entre 1994 y 2004) para recobrar los impulsos desarrollistas anteriores. Cabe notar aquí que muchos de los flujos extranjeros, se dedicaron a adquirir empresas públicas o privadas que inflan las cifras sin tener los efectos plenos de la inversión fresca en la construcción de nuevas capacidades productivas.

En conjunto, desde 1980 la evolución de la inversión ha resultado marcada por extrema volatilidad que resta consistencia al proceso de desarrollo y crea desconcierto, incertidumbre, en la marcha de los negocios. Por lo demás, los efectos de la caída secular en la formación pública de capital parece demostrar que ésta tiene un carácter complementario más que sustitutivo de la inversión privada.

Desde otro punto de vista, una de las razones en que se apoyó el abandono de las políticas proteccionistas fueron sus efectos desequilibradores en la balanza de pagos y los beneficios potenciales del aprovechamiento de una demanda externa, siempre mayor que la nacional, propósitos ambos que se conseguirían con la apertura de fronteras. No resultó así. El modo de suprimir las fronteras económicas lejos de facilitar la adaptación de los sistemas productivos nacionales a la competencia internacional, causaron destrucción de empresas y encadenamientos interindustriales y la inundación consiguiente del mercado interno con importaciones. Las exportaciones también se expandieron

con rapidez pero no en medida suficiente para borrar los desequilibrios de pagos. Hoy estos sólo se pueden corregir disminuyendo el crecimiento de la economía a fin de comprimir las importaciones o atrayendo a cualquier costo a la inversión extranjera en virtud de que se ha adoptado una política de desendeudamiento externo, salvo en el caso de la “pidiregas” de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Frente a la debilidad del crecimiento y la formación de capital, no es de extrañar la desatención que han recibido los problemas sociales del país desde comienzos de la década de los ochenta. El sector moderno de la economía, con excepción parcial de algunos servicios, no ha creado ofertas de empleo compatibles con el nivel y el crecimiento de la población económicamente activa. Como consecuencia, el 40% de la población vive en la pobreza y el 13% en la indigencia. Alrededor del 40% de la fuerza de trabajo se localiza en el sector informal. Los salarios mínimos han caído 70% en términos reales y los contractuales entre 20% y 30% en el período 1982-2003. El 63% de la población activa no está amparada por ninguno de los sistemas de seguridad social. El hambre, la falta de oportunidades impulsan a casi medio millón de mexicanos a emigrar aún con riesgo de sus vidas.

La pasividad de las políticas públicas sea en materia de política industrial, de fomento al sector exportador o de aliento a la formación de capital y creación de empleos, está resquebrajando las reformas económicas neoliberales tanto como los procesos de modernización democrática al desatender las demandas legítimas de la población trabajadora. En suma, sin políticas activas de fomento y de gasto público en infraestructura, es difícil activar los fondos privados y el espíritu empresarial. Sin inversión fresca y sostenida resulta imposible modernizar el aparato productivo y alcanzar la ansiada competitividad

internacional. Sin expansión del aparato productivo resulta ilusoria la meta de multiplicar las fuentes de trabajo y acabar con la pobreza.